----- EN CIUDAD VICTORIA, CAPITAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, siendo las diez horas del día nueve de agosto de dos mil veintidós, reunidos en el Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de Justicia del Estado los Ciudadanos Magistrados Horacio Ortiz Renán, Alejandro Alberto Salinas Martínez, Javier Castro Ormachea, David Cerda Zúñiga, Jorge Alejandro Durham Infante, Hernán de la Garza Tamez, Mauricio Guerra Martínez, Noé Sáenz Solís y Omeheira López Reyna, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a quien por turno así correspondió, en Sesión Ordinaria que dio inicio en la fecha y hora indicadas.-----

----- Acto seguido el Secretario General de Acuerdos pasó lista de asistencia, con la ausencia de la Magistrada Gloria Elena Garza Jiménez, previo aviso al H. Pleno y habiendo quórum el Magistrado Presidente declaró abierta la Sesión. Se acordó igualmente dispensar la lectura del acta relativa a la Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el día dos de agosto de dos mil veintidós, por haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y una vez aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobó por unanimidad de votos.-----

----- Enseguida el Secretario General de Acuerdos dio cuenta con los siguientes asuntos:-----

1.- Oficio 1186/2022 del quince de julio de dos mil veintidós, del licenciado José Luis Tobías Bazán, Juez de Control de la Segunda Región Judicial, mediante el cual rinde el informe requerido, dentro del expediente 7/2022 formado con motivo de la recusación interpuesta en su contra por al Agente del Ministerio Público, en la carpeta CP/00018/2019 relativa a la causa seguida en contra de Edgar Antonio Barajas Jiménez por los delitos de Asociación Delictuosa, Delitos Cometidos contra Servidores Públicos, Homicidio en Grado de Tentativa y Daño en Propiedad.-----

ACUERDO.- Se ordenó agregar a sus antecedentes para que obren como en derecho corresponde y al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se tiene en tiempo al compareciente rindiendo el informe relativo a los hechos de la recusación, en la forma y términos a que se refiere en el oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia correspondiente. Ahora bien, tomando en cuenta que al admitir a trámite la recusación, se dispuso que por conducto de la Encargada de Sala y de Seguimiento de Causas de la Segunda Región Judicial con sede en Xicoténcatl, se hiciera del conocimiento de las partes, sin que obra en autos las constancias respectivas; en esa virtud, se estima no se está en condiciones de celebrar la audiencia programada para esta fecha. Por tanto, con el objeto de que las partes tengan conocimiento de la misma y estén además en condiciones en su caso, de hacer valer lo que a su derecho convenga; con fundamento en lo dispuesto por el diverso artículo 41 del invocado Ordenamiento Adjetivo, se señalan las diez horas del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, para que en el contexto de la sesión ordinaria del Tribunal Pleno de esa fecha, tenga verificativo la audiencia respectiva en la recusación interpuesta, la cual se celebrará con las partes que comparezcan, y en la misma se dictará resolución. Se dispuso comunicar lo anterior a la Encargada de Sala y de Seguimiento de Causas de la Segunda Región Judicial con sede en Xicoténcatl, para que por su conducto lo haga del oportuno conocimiento de las partes y oportunamente remita las constancias respectivas.-----

2.- Oficio 17699/2022 del veinte de julio de dos mil veintidós, de la Secretaria del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado, mediante el cual notifica el auto que difiere la audiencia constitucional en el Juicio de Amparo 545/2022-I promovido por “Comercializadora de Combustibles y Derivados

Fuentes”, S.A. de C.V., contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 8/2022 formado con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto en el expediente 432/2021 relativo al Juicio Oral Mercantil promovido “Combustibles Camino Real”, S. de R.L., en contra de la impetrante, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial.-----

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción II, inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al respecto, en su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, rendir el informe justificado que se solicitó; debiendo precisar que la impetrante en su ampliación, reclama la notificación realizada el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, relativo la interlocutoria dictada el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, a través de la cual se declara improcedente el incidente de incompetencia por declinatoria interpuesto por la parte demandada.-----

3.- Oficio 12899/2022 del uno de julio de dos mil veintidós, de la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que admite la ampliación de la demanda en el Juicio de Amparo 692/2022-VI promovido por “Alimentos con Idea”, S.A. de C.V., contra actos de esta y otra autoridad, dentro del expediente 9/2021 formado con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte demandada, en el expediente 300/2018 relativo al Juicio Oral Mercantil promovido por Adriana Ma. Jiménez Cárdenas en contra de la impetrante, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial; asimismo requiere para que en el término de quince días se rinda el informe justificado.-----

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción

II, inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al respecto, en su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, rendir el informe justificado que se solicita; debiendo precisar que la impetrante en su ampliación, reclama la notificación realizada el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, relativo la interlocutoria dictada el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, a través de la cual se declara improcedente el incidente de incompetencia por declinatoria interpuesto por la parte demandada.-----

4.- Oficio 22847/2022 del cuatro de agosto de dos mil veintidós, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que admite la demanda en el Juicio de Amparo 1355/2022 promovido por Enriqueta García del Fierro, contra actos de esta autoridad, dentro del cuaderno de antecedentes formado a la demanda de Juicio de Daños y Perjuicios por la ilegal anticipada ocupación y determinación de intereses de un bien inmueble, que por conducto de Pedro Albino García Olivella promueve en contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas y otros; asimismo requiere para que en el término de quince días se rinda el informe justificado.-----

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción II, inciso a), y 117 de la Ley de Amparo, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes y al respecto, en su oportunidad, por conducto del Magistrado Presidente, rendir el informe justificado que se solicita. Ahora bien, en consideración que adjunto al oficio de cuenta se remite sólo una copia el escrito relativo a un recurso de revocación suscrito por Pedro Albino García Olivella, no así copia de la demanda de amparo; en consecuencia, con el objeto de estar en condiciones de conocer el acto o actos que de esta autoridad se reclaman, para aceptar o negar su existencia, y apreciar los fundamentos de derecho y conceptos de

violación expresados, comuníquese dicha circunstancia al Juez Segundo de Distrito en el Estado, con la atenta solicitud de que dada la referida omisión disponga lo conducente y mande remitir a este Tribunal Pleno, una copia legible y completa de la demanda de amparo que promueve Enriqueta García del Fierro, con la expresa mención de que el término de quince días concedido para rendir el informe justificado, comenzará a correr a partir del siguiente día hábil de que se haya recibido la referida copia..-----

5.- Escrito del cuatro de agosto de dos mil veintidós, del licenciado Viliolfo Ramos Sánchez, autorizado de la parte demandada, mediante el cual se da por notificado del auto dictado el dos de agosto en curso, ofrece pruebas y formula alegatos, en el expediente 39/2022 formado con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto por la parte demandada, dentro del expediente 223/2022 relativo al Juicio Oral Mercantil promovido por “Sofom Inbursa”, S.A. Sociedad Financiero de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Inbursa, en contra de Martha Gloria Díaz Villaseñor, ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.-----

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1069, 1077 y 1117, párrafo tercero, del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde y al respecto, por una parte, se tuvo al compareciente desde la fecha de presentación del escrito de cuenta, dándose por expresamente notificado del auto dictado el dos de agosto de dos mil veintiuno, por el cual se admite a trámite el incidente de incompetencia por declinatoria interpuesto, sin que a esto resulte obstáculo la notificación personal electrónica ordenada y a que se refiere el Folio NPE: 80 remitida a la cuenta de correo electrónico proporcionada, a las trece horas con treinta y siete minutos del

cinco de agosto en curso, toda vez que no existe constancia de que se hubiera recibido mediante su consulta por la parte interesada. Por lo demás, esto es, en cuanto a las pruebas que ofrece y alegatos que formula el compareciente, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad en virtud de que la citada promoción deviene anticipada al estado procesal que guardan los autos; lo que se considera de esta manera, en razón de que la parte actora fue notificada del auto que admite el incidente mediante, cédula que se fijó en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos y en los estrados electrónicos, el cinco de agosto en curso, misma notificación que de conformidad con el artículo 1075 del invocado Código de Comercio, surtió sus efectos hasta el día siguiente hábil de su publicación; y el término de tres días concedido a las partes con el objeto de que ofrecieran pruebas y alegaran lo que a su interés conviniera, es común, y no puede empezar a correr sino hasta que quede notificada la totalidad de las partes, al tenor de lo prevenido en el artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por tanto, si el escrito que se provee, con el que se ofrecen pruebas y formulan alegatos, se presentó desde el cuatro de agosto de dos mil veintidós, deviene anticipado y debe tenerse como si no se hubiese realizado. Lo anterior precisamente, por virtud del principio de eventualidad procesal, de conformidad con el cual, en todos los actos procesales las partes tienen la carga de hacer valer, en la fase procesal oportuna, las acciones y derechos que a estas concierne; es decir, deben hacer valer y ejercitar en cada uno de los periodos respectivos los hechos y cuestiones sobre los que deseen una decisión judicial, so pena de la extinción o pérdida del derecho o de la facultad procesal que no fue ejercida en el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de ese acto.-----

6.- Oficios 1070/2021 y 1098/2021 fechados respectivamente el doce de julio y tres de agosto de dos mil veintidós, del Juez Primero de

Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, mediante los cuales rinde su informe y remite los autos del expediente 123/2020 relativo al Juicio Sumario sobre Responsabilidad Civil Subjetiva Extracontractual, promovido por Karla Verónica González Romero, Joel Sánchez Chávez y María del Rosario Hernández Pérez, por sus propios derechos y la primera además en representación legal de su menor hijo M.A.S.G., en contra de “Kongsberg Driveline Systems”, S. de R.L. de C.V., y “Transportes Lozano Muñiz”, S.A. de C.V., a efecto de substanciar la recusación interpuesta por la primera de las demandadas.-----

ACUERDO.- Se ordenó formar el expediente y registrar con el número que le corresponde. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 58 y 219 del Código de Procedimientos Civiles, previamente a proveer lo que en derecho proceda, se instruyó al Secretario General de Acuerdos para que asiente en autos el cómputo del término fijado por el Juez de Primera Instancia a la parte demandada recusante para que comparezca ante este Tribunal y certifique si el propio recusante ocurrió dentro del citado término mediante escrito, a continuar el trámite de la recusación interpuesta, y una vez hecho lo anterior, dése nueva cuenta.----

7.- Oficio 3334 del dos de agosto de dos mil veintidós, del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite los autos del expediente sin número (Folio 851/2022) relativo a la demanda de Juicio Sumario Civil sobre Alimentos Definitivos que promueve José Rolando Barrón Solís en contra de Aída Gabriela Gómez Sigrist, con el objeto de que se determine quién es la autoridad competente que debe asumir su tramitación.-----

ACUERDO.- “....Primero.- Es inexistente el conflicto de competencia entre los Jueces Segundo y Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, ambos

del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, dentro del expediente sin número (Folio 851/2022) relativo a la demanda de Juicio Sumario Civil sobre Alimentos Definitivos que promueve José Rolando Barrón Solís en contra de Aída Gabriela Gómez Sigrist, en los términos y por las razones expuestas en el considerado único de este fallo.

Segundo.- Devuélvase los autos del expediente descrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, a efecto de que respecto a la citada demanda, provea lo que conforme a derecho proceda. **Tercero.-** En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido; en la inteligencia que para su depuración, se hace constar que no obran documentos originales presentados por las partes, debiendo conservar solamente la resolución....”.-.....

8.- Escrito del dos de agosto de dos mil veintidós, anexos y copias simples, de Benito Arturo Rivera Izaguirre, quien por su propio derecho y de conformidad con los artículos 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas, promueve Juicio Ordinario de Daños y Perjuicios por la ilegal anticipada ocupación y determinación de intereses de un bien inmueble, en contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas y otros.-.....

ACUERDO.- Como se destaca, el compareciente refiere promover de conformidad con la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas, Juicio Ordinario de Daños y Perjuicios por la ilegal anticipada ocupación y determinación de intereses de un bien inmueble propiedad de su representada. En ese sentido, se impone resolver primeramente si este Tribunal Pleno puede avocarse al conocimiento de dicha controversia, o si por el contrario no resulta competente para los efectos descritos. Lo cual es así, toda vez que

conforme a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 6/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, la competencia constituye un presupuesto procesal, necesario para dictar una resolución jurídicamente válida. En este orden de ideas, la competencia, como medida y límite de la jurisdicción, se traduce en la facultad que tiene un juez o tribunal para conocer de ciertos negocios y esa facultad debe serle atribuida por la ley. Al respecto, cabe hacer la precisión que ni de los invocados preceptos que cita el promovente, ni de ningún otro de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio del Estado de Tamaulipas, se advierte disposición alguna que establezca o defina qué juez o Tribunal es competente para substanciar el procedimiento relativo, cuando el expropiado se inconforma o controvierte el monto de la indemnización. Sin embargo, la imprevisión, falta de claridad o insuficiencia de la ley no es obstáculo para dejar de resolver sobre el punto cuestionado. En este sentido, es principio que toda demanda debe formularse ante juez competente, y que ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto sino por considerarse incompetente, caso en el que debe expresar en su resolución, los fundamentos legales en que se apoye. Asimismo, es de advertir que la competencia de los tribunales se determina por la cuantía, la materia, el grado y el territorio. Señalado lo anterior, cabe decir que no se está en el caso de admitir a trámite la demanda en cuestión, toda vez que no se actualiza la competencia de este Tribunal Pleno, en razón de la materia. En efecto, al tenor del artículo 114, apartado A, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y su correlativo 20, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, son atribuciones del Supremo Tribunal de Justicia, conocer en Pleno de las controversias del orden civil o mercantil que se susciten entre particulares y el Estado; de donde se sigue que su competencia está acotada en el

ámbito jurisdiccional, para conocer de las citadas controversias del orden civil o mercantil, si en las mismas figura como parte, sea actora o demandada, el Estado de Tamaulipas; por lo que si la ley faculta a este Tribunal Pleno para conocer sólo de asuntos de las expresadas materias (civil o mercantil) que se susciten por los particulares y el Estado, o sea aquellos del interés del Estado de Tamaulipas, entendiéndose por tales, los que afecten o puedan afectar su esfera jurídica; debe colegirse que no resulta competente para conocer de asuntos de naturaleza distinta. Para lo que cabe tener en cuenta que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J.83/98, ha establecido que para resolver un conflicto de competencia en razón de la materia, debe atenderse exclusivamente a la naturaleza de la acción, la cual se determina a través del estudio de las prestaciones reclamadas, los hechos narrados, las pruebas aportadas y los preceptos legales que en su caso se invoquen en la demanda, ejercicio en el que se debe prescindir del estudio la relación jurídica sustancial entre las partes, por ser ello propio del fondo del asunto. Ahora, visto que en el presente caso lo que el promovente reclama es el pago de la cantidad líquida que resulte por la ilegal ocupación anticipada de una superficie de 4-93-79.03 hectáreas del bien inmueble que le pertenece, que forman parte del proyecto Puente Internacional Matamoros III, Gral. Ignacio Zaragoza "Los Tomates", de Matamoros, Tamaulipas, que le fue expropiada a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; el pago de los intereses legales de las cantidades que resulten con motivo de las anteriores reclamaciones, contados a partir de la fecha en que hubieran incurrido en mora; que se declare procedente su inconformidad con el supuesto avalúo de los bienes expropiados y el monto de la indemnización fijada a los terrenos que le fueron expropiados en la superficie descrita, por no incluir en el mismo las construcciones y mejoras que existen en el predio; el pago de los intereses

legales que resulten con motivo del retardo en el pago de la cantidad que se determinó como valor comercial del predio expropiado hasta que se efectúe el pago, por todo el lapso que dure el incumplimiento; el pago de las construcciones ubicadas en la superficie expropiada, con las condiciones y costos que tenía en fecha seis de marzo de dos mil catorce; el pago de los intereses legales que resulten con motivo del retardo en el pago de las referidas construcciones, y el pago de los gastos y costas que se generen por el presente juicio. Todo lo anterior, a partir de la exposición de hechos a que se contrae en el escrito de demanda, lo que funda en los preceptos que cita de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de dominio del Estado de Tamaulipas. En ese sentido, es conveniente traer a cuenta algunas consideraciones sobre la naturaleza jurídica que guarda dicho procedimiento, de las cuales se podrá concluir claramente su carácter administrativo. En efecto, la expropiación encuentra su fundamento en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la doctrina sobre esta institución la ubica como un acto soberano del Estado y por tanto, imbuido en el derecho público; lo cual le da su connotación administrativa. A este respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que se invoca, dejó precisado en lo conducente, que: “La expropiación es el acto por el cual el Estado, en beneficio de la colectividad, priva al particular de algún bien que le pertenece en propiedad, pagándole el precio correspondiente.” El Pleno del Máximo Tribunal del País, en diversa tesis aislada dejó establecido que: “La expropiación constituye un acto típico de soberanía, regido por leyes de orden público y no por la legislación civil, cuando menos por lo que se refiere a las relaciones entre el Estado y el sujeto pasivo de la expropiación.” En la misma línea, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, señala que: “La expropiación es un acto administrativo por el cual el Estado impone a un particular la cesión de su

propiedad por existir una causa de utilidad pública y mediante indemnización que al particular se le otorga por la privación de esa propiedad.” Más recientemente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente Varios 2/2006-SS, en su ejecutoria del dieciocho de agosto de dos mil seis, a propósito de esta institución, precisa que del artículo 27 constitucional es posible derivar, de un lado, el reconocimiento de un derecho fundamental a la propiedad privada, y de otro, una función social de la propiedad que incide sobre el interior del derecho mismo, configurándose como un haz de facultades individuales sobre las cosas y, al mismo tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones justificados en valores e intereses de la colectividad; y agrega que la Constitución ha establecido como límite del derecho fundamental a la propiedad privada la figura de la expropiación, consistente en una potestad administrativa dirigida a la supresión de los derechos de uso, disfrute y disposición de un bien particular, decretada por el Estado, con la finalidad de adquirirlo por causas de utilidad pública; que la expropiación no es una garantía social, en el sentido estricto y constitucional del concepto, sino que es una potestad administrativa que crea, modifica y/o extingue relaciones jurídicas concretas. Así, concluye, la expropiación es una potestad administrativa, dirigida a la supresión de los derechos de uso, disfrute y disposición de un bien particular, decretada por el Estado, con la finalidad de adquirirlo por causas de utilidad pública. Asimismo, por ejecutoria del nueve de mayo de dos mil dieciocho, dictada al resolver el Juicio de Amparo en Revisión 1174/2017, la mencionada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que el acto administrativo de expropiación tiene como efecto jurídico inmanente la extinción del derecho real de propiedad del administrado, pasando tal bien al ámbito público del derecho a fin de que se le otorgue la utilidad o beneficio colectivo -también público desde luego- que la autoridad

administrativa haya declarado en el decreto respectivo, conforme a las bases y lineamientos que establecen las leyes de la federación o de las entidades federativas. Por último, y no por ello menos importante, la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas, en su artículo 3º, fracción I, define la expropiación como el procedimiento de Derecho Público, por el cual el Estado, mediante indemnización, adquiere bienes o derechos reales de los particulares para el cumplimiento de un fin de utilidad pública. Con base en las referencias que anteceden, no cabe duda que la expropiación constituye una institución jurídica de derecho público, de carácter netamente administrativo. Ahora, sobre el procedimiento expropiatorio, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en lo que al presente caso resulta conducente, señala que consta de dos etapas. La primera, comprendida entre el inicio del procedimiento en que se declara la causa de utilidad pública y la emisión del decreto correspondiente, en la que el Estado debe realizar, de manera unilateral, estudios para fundar y motivar la causa de utilidad pública y la necesidad de la obra a la cual va a destinar los bienes expropiados. La segunda, que abarca desde la notificación del decreto a los interesados hasta que se lleva a cabo su total ejecución. Así, en cuanto a los medios de defensa que puede desplegar el interesado, alude puede optar por alguna de las siguientes vías: interponer el recurso de revocación contra ese decreto; cuestionar judicialmente el monto de la indemnización que se haya fijado por el bien materia de la expropiación; exigir el pago de la indemnización una vez vencido el plazo legal; en su caso, solicitar la reversión de la expropiación cuando dentro del plazo legal no se destine la cosa al fin público que se invocó en el decreto; o incluso promover directamente el juicio de amparo en contra del decreto y los vicios de que pudiere adolecer el procedimiento expropiatorio, en los casos en que se actualice alguna

excepción al principio de definitividad. Las aludidas etapas se encuentran bien definidas en la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas. Para esto vale tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 5° al 8 del citado Ordenamiento, en los que se identifica a los entes y autoridades que pueden instar el procedimiento, mientras la segunda de las mencionadas etapas, que abarca desde la notificación del decreto a los interesados hasta que se lleva a cabo su total ejecución, se identifica en las disposiciones legales que le siguen. Cabe señalar en ese sentido, sobre las posturas que en su defensa puede adoptar el afectado de la expropiación, también se encuentran identificadas, pues al respecto tiene a su alcance: a) interponer ante el Titular del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, el recurso de revocación previsto en el artículo 11 de la Ley; b) cuestionar judicialmente el monto de la indemnización que se haya fijado en términos del artículo 18; c) solicitar la reversión de la expropiación cuando dentro del plazo legal no se destine la cosa al fin público que se invocó en el decreto, conforme dispone el artículo 15; o bien, d) promover directamente el juicio de amparo en contra del decreto y los vicios de que pudiere adolecer el procedimiento, visto que el recurso de revocación administrativa no tiene efectos suspensivos en los casos a que se refiere el artículo 14, que actualizan la excepción al principio de definitividad, de acuerdo con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En el presente caso ocupa referirnos al segundo de los supuestos aludidos. Una primera mención a esta controversia se encuentra contenida en el artículo 9° de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas, en cuanto dispone que dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo o decreto de expropiación correspondiente, los interesados podrán acudir al procedimiento judicial a que se refiere el artículo 18 del citado

Ordenamiento, limitando la materia de dicho procedimiento, al establecer que su único objeto será controvertir el monto de la indemnización y, en su caso, exigir el pago de los daños y perjuicios. Es pertinente señalar que la interposición de dicha controversia no impide a la autoridad administrativa la ocupación material del bien expropiado o la ocupación temporal, ni la ejecución en la limitación al dominio, impuestas mediante el decreto correspondiente, conforme así se determina en sus artículos 13 y 26, párrafo tercero, es decir, no acarrea efectos suspensivos a la ejecución material del decreto. Por otro lado, los artículos 18 al 24 del Ordenamiento en consulta, aluden al objeto y trámite de este procedimiento. Así, el primer precepto dispone que cuando se controvierta el monto de indemnización, se hará la consignación al juez competente, quien fijará a las partes el término de tres días para que designen sus peritos, con apercibimiento de designarlos en rebeldía si no lo hacen; también se les prevendrá que designen de común acuerdo un perito tercero para el caso de discordia; y si no lo nombraren, será designado por el juez. Señala el artículo 19 que en contra de la resolución del juez que haga la designación de peritos, no procederá recurso alguno; el artículo 20 refiere que en los casos de renuncia, muerte o incapacidad de algunos de los peritos designados, se hará nueva designación dentro del término de tres días por quienes corresponda. El artículo 21 prevé que los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que los nombre y los del tercero por ambas partes. El artículo 22 dispone que el juez fijará un plazo que no exceda de treinta días para que los peritos rindan su dictamen; término que podrá ampliarse hasta por otro periodo igual, mediante acuerdo fundado y motivado por el juez. En el artículo 23 previene que si los peritos estuvieren de acuerdo en la fijación del valor de la mejoras o del demérito, el juez de plano fijará el monto de la indemnización, pero en caso de discordancia, llamará el tercero, para que dentro del plazo que le fije, que

no excederá de treinta días, rinda su dictamen; y que con vista en los dictámenes de los peritos, el juez resolverá dentro del término de diez días lo que estime procedente. El artículo 24 se refiere a la definitividad de esta determinación, al establecer que contra la resolución judicial que fije el monto de la indemnización no cabrá recurso alguno. No escapa mencionar que el segundo párrafo del artículo 1º del Ordenamiento en consulta, señala que en lo no previsto por dicha ley y resulte conducente, supletoriamente se aplicará el Código de Procedimientos Civiles para el Estado. De acuerdo con lo expuesto, se pone de manifiesto lo anteriormente señalado en cuanto a que no se advierte del artículo 18 ni de ningún otro precepto de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio del Estado de Tamaulipas, disposición alguna que establezca o defina qué juez o Tribunal es competente para substanciar el procedimiento relativo, cuando el expropiado controvierte el monto de la indemnización. Por lo tanto, partiendo de la base de que el procedimiento de expropiación constituye una institución de orden público, imbuido dentro de la esfera administrativa, no es posible sustraer la inconformidad en que se controvierte el monto de indemnización de la naturaleza que le es propia a la causa que la origina, esto es, al acto administrativo por el cual el Estado dispone imperativamente, por razones de utilidad pública, la adquisición de un bien ajeno (su ocupación temporal o la limitación al dominio) mediante indemnización a manera de compensación por la pérdida de la propiedad o afectación sufrida; sin que la circunstancia de que en lo no previsto y resulte conducente, sea supletorio a la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas, el Código de Procedimientos Civiles, pues ello no da margen a considerar que se trate de una controversia del orden común entre personas de derecho privado, en la medida que en el fondo, lo que existe es una controversia generada entre la administración pública estatal

y el particular afectado con el decreto de expropiación, ocupación temporal o limitación del dominio impuestos; máxime que la citada legislación procesal no contiene disposición expresa que le confiera competencia a los jueces civiles de la Entidad y menos a este Tribunal Pleno, para conocer de estos procedimientos. Controversia cuyo objeto se limita a resolver, con vista a la inconformidad planteada y previo juicio de peritos, el monto de la indemnización a cubrir al afectado, y concluir de manera definitiva el procedimiento de expropiación, al no preverse recurso alguno contra esta determinación. En consecuencia, toda vez que se trata de una controversia generada por actos emitidos en el ámbito del derecho administrativo, no puede válidamente catalogarse como de aquellas de carácter civil o mercantil suscitadas entre los particulares y el Estado, competencia del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, a que se refieren los artículos 114, apartado A, fracción III, de la Constitución Política del Estado y 20, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; sino en todo caso, su competencia radica en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Ciertamente, al tenor del artículo 58, fracción LVI, de la Constitución Política del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, constituye el órgano jurisdiccional dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y establecer su organización, funcionamiento, procedimiento y, en su caso, los recursos contra sus resoluciones, y tiene a su cargo, entre otras funciones, dirimir controversias que se susciten entre la administración pública estatal o municipal y los particulares. Es precisamente atendiendo a la naturaleza administrativa que reviste el procedimiento de expropiación, que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, definió la competencia del entonces denominado Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para conocer de la impugnación planteada contra la resolución que dirime la reversión en contra de un

decreto de expropiación; y en el mismo sentido, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, señaló que de acuerdo a una interpretación histórico-tradicional del artículo 11 de la Ley de Expropiación, en relación con la base quinta del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 31, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, éste es competente para conocer del juicio contencioso contra la resolución que fija en un avalúo la cantidad que ha de pagarse por concepto de la indemnización por expropiación de un inmueble ubicado en esa Entidad en términos de la ley respectiva, atento que precisamente en las aludidas base constitucional y disposición legal se prevé la existencia de este Tribunal con plena autonomía para dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de la administración pública local, dotado de competencia expresa para conocer de juicios promovidos en contra de actos administrativos que dicten, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de personas físicas o morales, las autoridades de la administración pública del Distrito Federal. Por lo que, trasladadas dichas consideraciones al presente caso, se concluye que en la medida que la demanda planteada no se trata de una controversia de carácter civil o mercantil suscitadas entre los particulares y el Estado, sino más bien, de una controversia generada por actos emitidos en el ámbito del derecho administrativo; específicamente motivada por la inconformidad que la parte afectada con el inicial decreto expropiatorio de fecha cuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho, publicado en el Periódico Oficial del Estado el seis de los citados mes y año, que motivó la ocupación de la superficie indicada del inmueble de su propiedad que se dejó sin efecto para que se le otorgara la garantía de audiencia, el diverso decreto expropiatorio de fecha seis de marzo de dos mil catorce, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha once del propio marzo, por el que se expropió 4-93-

79.03 hectáreas del inmueble de su propiedad, fijando un valor bajo al no tomar en cuenta el valor comercial; así como el diverso decreto publicado en el citado medio de difusión oficial el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, donde el Gobernador del Estado impone a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la obligación de pagar la indemnización, como beneficiaria de la expropiación, y con base en el cual, el INDAABIN emitió, de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, determinó como valor por metro cuadrado a la fecha de expropiación de \$2,501.94 (dos mil quinientos un pesos 94/100 moneda nacional), contravirtiendo el promovente expresamente el monto de la indemnización, pues al efecto considera debe cubrir los diversos conceptos a que se refiere, por la ocupación anticipada del predio expropiado, los intereses legales que resulten con motivo de dicha reclamación, las construcciones y mejoras que existen en el predio, los intereses legales que resulten del retardo en el pago de la cantidad que se determine como valor comercial, el pago de las construcciones ubicadas en la superficie de terreno expropiado, así como los intereses legales legales que resulten con motivo del retardo en el pago de dichas construcciones; debe concluirse que este Tribunal Pleno no es la autoridad jurisdiccional competente a que se refiere el artículo 18 de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas, para substanciar el procedimiento para determinar, previo juicio de peritos, el monto definitivo de dicha indemnización; y en tanto lo que en dicha demanda subyace, es una controversia generada entre la administración pública estatal y el particular afectado con el decreto de expropiación, la competencia legal para conocer de la misma radica en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, pues éste constituye el órgano jurisdiccional al que constitucional y legalmente corresponde, entre otras funciones, dirimir controversias que se susciten entre la administración pública estatal o

municipal y los particulares. Lo anterior, con apoyo en el invocado artículo 58, fracción LVI, de la Constitución Política del Estado, y 2, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, de conformidad con el cual, este tendrá competencia para conocer de juicios en materia fiscal y contenciosa administrativa, así como para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal y los particulares, entre otras. Sin que a esta conclusión represente obstáculo que el procedimiento en que se controvierte el monto de la indemnización por expropiación, no se encuentre expresamente previsto en alguna de las hipótesis que establece el diverso artículo 4 de la invocada Ley Orgánica, ello, si se tiene en cuenta que el referido Cuerpo de Normas reserva al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, competencia genérica para conocer de juicios en materia fiscal y contenciosa administrativa, así como para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal y los particulares; caso en el que, con base en las consideraciones expuestas, se encuentra la inconformidad a que se contrae el escrito de demanda que promueve el compareciente Benito Arturo Rivera Izaguirre, quien comparece por su propio derecho. Resultando por lo anterior, que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, no es competente, en razón de la materia, para conocer de dicha controversia. En apoyo a lo anterior, resulta aplicable por analogía, la invocada tesis aislada I.9o.A.53. A (10a.), referida en antecedentes, misma que sustenta el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: ***“TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO CONTENCIOSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE FIJA EN UN AVALÚO LA CANTIDAD QUE HA DE PAGARSE POR CONCEPTO DE LA INDEMNIZACIÓN POR***

EXPROPIACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN ESA ENTIDAD

EN TÉRMINOS DE LA LEY RESPECTIVA.” (Gaceta del Semanario

Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Materia Administrativa, Común, página 2410, Registro digital 2005613).

Por tanto, si como queda evidenciado, no se trata de una contienda de naturaleza civil y mucho menos mercantil, de las que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas puede conocer, es improcedente su admisión, lo que impone sea desechada de plano la citada demanda. De ahí que, sin declinar competencia a ningún otro Tribunal, devuélvanse al promovente los documentos exhibidos, previa toma de razón y de recibo que se deje asentada en autos; quedando a salvo sus derechos con el objeto de que en su caso los haga valer como y ante quien corresponda. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ***“COMPETENCIA. SI EL JUICIO NO SE HA INICIADO, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DECLARAR DE OFICIO QUE CARECE DE ELLA, PONIENDO A DISPOSICIÓN DEL ACTOR LA DEMANDA Y SUS ANEXOS, SIN DECLINARLA A FAVOR DE OTRO.”***

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, Materias Civil, Común, Tesis 1a./J. 25/97, página 53, Registro 198216). En distinto punto, toda vez que el promovente señala para el efecto de oír y recibir notificaciones un domicilio ubicado en Matamoros, Tamaulipas, esto es, en un lugar distinto a donde radica este Tribunal, se ordenó que las notificaciones de carácter personal se le hagan conforme a las notificaciones que no deban ser personales, es decir mediante cédula que se fije en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos, así como en los estrados electrónicos. Se autorizó a los diversos profesionistas que el promovente menciona, para que en su nombre y representación oigan y reciban notificaciones; sin que sea

procedente autorizar el acceso por medios electrónicos, la realización de notificaciones y la presentación de promociones por la misma vía, dado que dicho sistema informático no se encuentra disponible ni opera respecto de asuntos desestimados, como es el caso.-----

9.- Expediente 1/2022 formado con motivo del recurso de reclamación interpuesto por el licenciado Carlos Castillo Acevedo, contra el auto dictado por el Magistrado Presidente, del diecisiete de febrero de dos mil veintidós, por el cual se niega el registro de su Título Profesional de Licenciado en Derecho Burocrático.-----

RESOLUCIÓN: “.... **Primero.-** Es infundado el recurso de reclamación interpuesto por el licenciado Carlos Castillo Acevedo, contra el auto dictado por el Magistrado Presidente, del diecisiete de febrero de dos mil veintidós, por el cual se niega el registro de su Título Profesional de Licenciado en Derecho Burocrático, en los términos y por las razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. **Segundo.-** Se confirma el auto impugnado a que alude el punto resolutivo anterior. **Notifíquese personalmente.-....**”-----

10.- Expediente 33/2022 formado con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria planteado por la parte demandada dentro del expediente 271/2021 relativo Juicio Oral Mercantil promovido por Celina Miguel García, en contra de "Seguros Banorte", S.A. de C.V., ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira

RESOLUCIÓN: “....**Primero.-** Es improcedente el Incidente de Incompetencia por Declinatoria interpuesto por el demandado licenciado Luis Ramírez González, apoderado general para pleitos y cobranzas de "Seguros Banorte", S.A. d C.V., dentro del expediente 271/2021 relativo al Juicio Oral Mercantil promovido por Celina Miguel García, en contra de la ahora incidentista, ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil

del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, en los términos y por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo.

Segundo.- Se declara que la Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, es competente para conocer del juicio oral mercantil descrito en el punto resolutivo anterior; por lo que, con testimonio de la presente resolución, se instruye a la titular del Juzgado en mención a efecto de que continúe en el conocimiento del asunto por sus demás trámites legales. **Tercero.-** En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro respectivo; en la inteligencia que para su depuración, se hace constar que no obran documentos originales presentados por las partes, debiendo conservar solamente la resolución. **Notifíquese personalmente.-....”**.....

TURNO DE ASUNTOS

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR

1. Expediente 1397/2021 procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.....
2. Expediente 208/2022 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala.....
3. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera Sala.....
4. Expediente 49/2022 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera Sala.....
5. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta Sala.
6. Expediente 168/2020 procedente del Juzgado Segundo de Primera

Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta Sala.-----

7. Expediente 00000/0000 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Séptima Sala.-----

8. Expediente 525/2021 procedente del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Séptima Sala.-----

9. Expediente 11/2022 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial.- Turnado a la Octava Sala.-----

10. Expediente 360/2022 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Octava Sala.-----

11. Expediente 342/2010 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Novena Sala.-----

12. Expediente 416/2021 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Novena Sala.-----

COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR

1. Expediente 1096/2018 procedente del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-----

2. Expediente 23/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-----

3. Expediente 32/2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala

Colegiada.-----

4. Expediente 443/2019 procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-----
5. Expediente 838/2020 procedente del Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-----
6. Expediente 102/2021 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-----
7. Expediente 262/2021 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-----
8. Expediente 421/2021 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-----
9. Expediente 1281/2021 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera Sala Colegiada.-----
10. Expediente 51/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-----
11. Expediente 1121/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-----
12. Expediente 1337/2016 procedente del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-----
13. Expediente 440/2019 procedente del Juzgado Primero de Primera

Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-----

14. Expediente 1362/2019 procedente del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-----

15. Expediente 167/2020 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-----

16. Expediente 113/2021 procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-----

17. Expediente 227/2021 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-----

18. Expediente 382/2021 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala Colegiada.-----

UNITARIAS PENALES

1. Expediente 82/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.-----

2. Expediente 90/2015 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.-----

3. Expediente 6/2016 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala.-----

4. Expediente 21/2012 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.-----

5. Expediente 850/2016 procedente del Juzgado Primero de Primera

- Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.-----
6. Expediente 36/2019 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Padilla.- Turnado a la Cuarta Sala.-----
7. Expediente 145/2010 procedente del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.-----
8. Expediente 85/2013 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta Sala.-----
9. Expediente 132/2021 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Victoria.- Turnado a la Sexta Sala.-----

COLEGIADA PENAL

1. Expediente 138/1997 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-----
2. Expediente 355/2009 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Décimo Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-----
3. Expediente 299/2013 procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-----
4. Expediente 17/2015 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-----
5. Expediente 106/2015 procedente del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-----
6. Expediente 1118/2016 procedente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-----

7. Expediente 105/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-

8. Expediente 130/2018 procedente del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-

9. Expediente 44/2021 procedente del Tribunal de Enjuiciamiento Mante.- Turnado a la Sala Colegiada Penal.-----

----- Con lo anterior, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión siendo las once horas con diez minutos del día de su fecha.-----

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones previamene efectuadas y firmada por los Magistrados Horacio Ortiz Renán, Alejandro Alberto Salinas Martínez, Javier Castro Ormaechea, David Cerda Zúñiga, Jorge Alejandro Durham Infante, Hernán de la Garza Tamez, Gloria Elena Garza Jiménez, Mauricio Guerra Martínez, Noé Saéñz Solís y Omeheira López Reyna; siendo Presidente el primero de los mencionados; en Sesión Ordinaria celebrada el doeciséis de agosto de dos mil veintidós, ante el SecretarioGeneral de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos. Doy fe.-----

Magistrado Horacio Ortiz Renán

Presidente

Mgdo. Alejandro Alberto Salinas Martínez

Mgdo. Hernán de la Garza Tamez

Mgdo. Noé Sáenz Solís

Mgdo. Javier Castro Ormaechea

Mgdo. Jorge Alejandro Durham Infante

Mgda. Omeheira López Reyna

Mgdo. David Cerda Zúñiga

Mgdo. Mauricio Guerra Martínez

Mgda. Gloria Elena Garza Jiménez

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos

Secretario General de Acuerdos

---- Las firmas que anteceden corresponden a la última página del acta de Sesión Plenaria de fecha (09) nueve de agosto de (2022) dos mil veintidós. Doy fe.-----